



Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA

EXPEDIENTE No.: 11001-33-35-010-2022-00324-00
ACCIONANTE: CLARA ROSA RECIO
ACCIONADAS: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES)-PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CLASE: ACCIÓN DE TUTELA

1.- De conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, concordante con el artículo 1° inciso 1° del Decreto 1382 de 2000, y el Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017, se **ADMITE** la ACCIÓN DE TUTELA instaurada por **CLARA ROSA RECIO** con cédula de ciudadanía **42.496.037**, en contra de las entidades **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES), y PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, en procura de la protección de sus derechos a la dignidad humana, igualdad, debido proceso administrativo y habeas data.

2.- Por otra parte, el despacho **se abstendrá de vincular al MINISTERIO DEL TRABAJO**, ente que se evoca como accionado en el encabezado inicial de la demanda, habida cuenta que de la lectura integral del libelo no se avizora que se predique vulneración alguna de derechos por parte de dicha entidad.

3.- De otro lado, en la tutela se expone tanto un acápite de “solicitud principal”, como un acápite de “pretensiones”, siendo en este último donde se solicita, *“LA MEDIDA URGENTE DE AMPARO JUDICIAL A MIS DERECHOS FUNDAMENTALES AL MÍNIMO VITAL Y SEGURIDAD SOCIAL POR MI CALIDAD DE MADRE COMUNITARIA, ORDENANDO AL ICBF, AL CERTIFICARME EN CALIDAD DE MADRE COMUNITARIA EN FECHA DEL 15 DE ENERO DEL 2020, REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA TRASLADAR A COLPENSIONES LOS APORTES CERTIFICADOS COMO NOMINADOR DEUDOR DEL CONTRATO LABORAL ADMINISTRATIVO, DEUDA PRESUNTIVA DE 209 SEMANAS CAUSADAS, EN UN PERÍODO DETERMINADO Y CERTIFICADO POR ELLOS”*.

4.- La Sala Plena de la Corte Constitucional en el Auto 312 de 2018 sintetizó tres exigencias básicas para que la adopción de medidas provisionales bien sea de oficio o a solicitud de parte, resulte procedente. Dichos presupuestos son, (i) Que la solicitud de protección constitucional contenida en la acción de tutela tenga vocación aparente de viabilidad por estar respaldada en fundamentos: (a) fácticos posibles y (b) jurídicos razonables, es decir, que exista la apariencia de un buen derecho (*fumus boni iuris*).

(ii) Que exista un riesgo probable de que la protección del derecho invocado o la salvaguarda del interés público pueda verse afectado considerablemente por el tiempo transcurrido durante el trámite de revisión, esto es, que haya un peligro en la demora (*periculum in mora*).

(iii) Que la medida provisional no genere un daño desproporcionado a quien afecta directamente.

5.- En cuanto al primer presupuesto, la Corte Constitucional en el Auto 251 de 2020, lo definió *“como un principio de veracidad en cuanto a la afectación del derecho o a la protección del interés público invocado como fundamento de la pretensión principal de la demanda de amparo”*. Aunque la misma Corte reconoció que en la fase inicial



del proceso no es posible arribar a un nivel total de certeza sobre la violación de los derechos fundamentales en controversia, sí es necesario un estándar de veracidad apenas mínimo. Por tal razón, la solicitud de medida provisional *“debe estar soportada en las circunstancias fácticas presentes en el expediente y en apreciaciones jurídicas razonables, sustentadas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional”*.

6.- Por su parte, en el análisis del segundo requisito (*periculum in mora*) es necesario sopesar el riesgo de que, al no adoptarse la medida cautelar, ocasione un perjuicio o daño mayor del que se expone en la demanda que, de no precaverse, transforme en tardío el fallo definitivo. En palabras de la Corte, este requisito puede identificarse como *“un temor fundado de que el derecho se frustre o sufra menoscabo durante la sustanciación del proceso”*¹.

7.- En la providencia en comento, la Corte precisó que el análisis de los dos presupuestos o requisitos debe ser conjunto. Precisamente, el segundo requisito (*periculum in mora*) impide que el juez de tutela profiera una orden ante la simple apariencia de verdad (*fumus bonis iuris*) de la solicitud cautelar. Ello quiere decir que si no existe riesgo de que se ocasione un daño mayor al señalado en la demanda de tutela la medida debe ser denegada, aun cuando exista apariencia de buen derecho. En palabras de la Corte, *“la medida provisional no es el escenario procesal para resolver el asunto de fondo, así se cuente con todos los elementos para tomar una decisión. El Artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 solo se activa cuando, además de la apariencia de verdad, se requiera la intervención urgente del juez. A su vez, esto supone la amenaza de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental o al interés público, que no podría ser corregido en la sentencia final.”*

8.- Por último, el tercer requisito incorpora el concepto de la proporcionalidad al análisis. La Corte indicó que *“si bien en esta fase inicial no es dable desarrollar plenamente el juicio de proporcionalidad, sí es necesario ponderar entre los derechos que podrían verse afectados con la medida. La ponderación que esta etapa demanda funge como una última salvaguarda en favor del ciudadano. Evita que se tomen medidas que, aunque podrían estar justificadas legalmente, ocasionarían un perjuicio grave e irreparable. La proporcionalidad no supone un estándar universal y a priori de corrección, sino que exige una valoración que atienda las particularidades de cada caso concreto”*.

9.- Una vez leído el escrito de tutela de la referencia y revisado el material probatorio aportado al expediente, el Juzgado considera que no se reúnen las condiciones necesarias para acceder a la medida cautelar solicitada, sin que ello implique prejuzgamiento.

10.- En cuanto a la apariencia de buen derecho, sin que implique prejuzgamiento alguno, no se avizora por el momento el principio de veracidad en cuanto a la afectación de los derechos fundamentales invocados por la accionante, pues es necesario escuchar las razones de defensa que invoquen las entidades accionadas ICBF y Colpensiones, a fin de dilucidar si le asiste o no la razón a la accionante, para que Colpensiones actualice su historia laboral en caso de haber fungido el ICBF, como empleador de la accionante para los periodos de cotización que echa de menos.

11.- Dado lo anterior, tampoco se cumple el segundo presupuesto para acceder a la medida deprecada, habida cuenta que no se observa tampoco un perjuicio o daño mayor o inminente que, de no accederse en este momento a la medida, transforme en tardío el fallo de tutela definitivo.

Por consiguiente, **se dispone:**

¹ Ibídem



1. Por el medio más expedito, comuníquese la iniciación de la actuación al Representante Legal de las accionadas **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES), y PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, a quienes se les enviará copia de la tutela y sus anexos para que dentro del término de dos (02) días contados a partir de la fecha de su recibo, se refieran sobre todos y cada uno de los hechos relacionados en el escrito de ésta.
2. Hágase la salvedad a las entidades requeridas de que, de no ser el funcionario competente para el conocimiento de la acción de la referencia, se remita de manera inmediata al que ostente dicha facultad, informando tal situación al Despacho
3. **NEGAR la medida de urgencia** solicitada en el libelo.
4. A fin de verificar la posible existencia de la cosa juzgada, por Secretaría OFICIESE al **JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR (CESAR)**, a fin de que aporte la siguiente información al presente trámite de tutela:
 - *Copia del escrito de tutela presentado por la señora CLARA ROSA RECIO, al cual se le impartió trámite bajo el radicado Nro. 2019 – 00082, así como del fallo de primera instancia proferido por el juzgado.*
 - *Indicar si la accionante, ha presentado incidente (s) de desacato, frente a lo ordenado mediante fallo de segunda instancia proferido dentro de dicho trámite constitucional.*
 - *En caso afirmativo, informar a este Despacho, qué autos se han emitido dentro del trámite de desacato presentado por el accionante y adjuntar copia de los mismos.*
5. Notifíquese mediante comunicación este auto a la parte accionante.
6. Con el valor legal que le corresponda téngase como pruebas las documentales acompañadas con el escrito de tutela.

Los documentos, respuestas, requerimientos o memoriales, deben ser allegados a través de correo electrónico a la dirección jadmin10bta@notificacionesrj.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**AUGUSTO LLANOS RUIZ
JUEZ**

A.O.R.-

Firmado Por:
Augusto Llanos Ruiz
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
010
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **36e95a80f22bd6601f4ebeda067ceaef4bb39c379088e4d87b43e32c12e1e943**

Documento generado en 31/08/2022 03:41:17 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>